



UNIDAD POPULAR

Corrupción y política: Basta de mirar para otro lado

**NO HAY REFORMA POLITICA SERIA
SIN DISCUTIR EL FINANCIAMIENTO DE LA POLITICA**

CLAUDIO LOZANO – JAIME FARJI

Julio 2016

Índice de contenido

1. Una ausencia sorprendente en la agenda de la “reforma política.....	3
2. Auge y declive de los gobiernos progresistas de América Latina	4
3. Limitaciones políticas y pérdida de la confianza popular	5
4. La ofensiva de la nueva derecha latinoamericana.....	6
5. La deserción de los intelectuales	7
6. Corrupción y política	8
7. Capitalismo y democracia	8
8. Democracias de baja calidad	10
9. Radicalizar la democracia	11

1. Una ausencia sorprendente en la agenda de la “reforma política”

Desde hace un tiempo la cuestión de la corrupción está instalada entre las preocupaciones de la sociedad, en un escalón inmediatamente inferior a temas como la seguridad, la inflación o el empleo. Va cobrando fuerza en el debate público porque, al margen de tener su propia entidad, esta cuestión interfiere en otras preocupaciones públicas. Es evidente que neutraliza numerosos aspectos virtuosos de las políticas públicas, no sólo por el desvío de fondos, sino por el desvío de los objetivos de las mismas.

Es una verdad de perogrullo afirmar que cuando hay un funcionario público corrupto, siempre hay algún privado que se beneficia. No obstante ello, los “formadores de opinión” suelen inducir los razonamientos para que se piense que es el funcionario el que corrompe al empresario y no al revés.

Luego, sólo resta asociar dos observaciones verdaderas para llegar a una conclusión falsa. Observación 1: hay numerosas evidencias de corrupción en el manejo del estado. Observación 2: en democracia los partidos políticos que ganan las elecciones tienen el derecho de conducir la administración pública. Conclusión falsa: la política y los políticos son los responsables de la corrupción.

A ello se agrega que en la última década, tanto en Argentina como en el resto de la región, numerosos gobiernos han tenido signo progresista, por lo que la asociación entre corrupción y política ha dado lugar a otra simplificación: la identificación de corrupción y gobiernos progresistas.

La confusión interesada que se logra de este modo debería conducir a la incorporación de un fuerte capítulo anticorrupción en cualquier debate sobre reforma política, pero paradójicamente no es así.

Cuando se pone en debate la reforma política se abordan temas como la boleta única, el voto electrónico, el “excesivo gasto político” entendido como el número de funcionarios políticos en la administración, o la cantidad de asesores, o sus remuneraciones, en los poderes legislativos. A lo sumo aparece el tema de la regulación del gasto de las campañas, pero como un problema presupuestario o atinente a las reglas de la competencia.

Se escamotea al debate la relación que se establece entre partidos y empresas en el financiamiento de la actividad política, lo que demuestra que hay interés por resaltar la corrupción en la actividad política para desprestigiar a los políticos, pero no hay tanto interés en analizar las causas, las complicidades, la totalidad del cuadro, y buscar las formas de terminar con este fenómeno fortaleciendo la democracia.

En este trabajo nos proponemos abordar la cuestión sin soslayar sus aspectos más incómodos, situándola en el contexto general del país y de la región, sin eludir que afecta a los partidos progresistas y populares y que desde esta perspectiva merece una reflexión, pero a la vez trataremos de revelar las cosas que el debate interesado oculta.

Nos proponemos demostrar que las causas de este problema están en la tensión existente entre capitalismo y democracia, que es una tensión que tiene múltiples dimensiones, de las cuales sólo nos proponemos analizar una de ellas: **las modalidades del financiamiento de la actividad política.**

Somos conscientes de que, en una sociedad de clases, el estado está penetrado por los intereses de los sectores sociales, y hasta en el límite, es “capturado” por los sectores dominantes. Esta realidad persistirá en tanto persista una sociedad dividida en clases, pero desde el momento que existe una esfera de acción política con autonomía (siempre relativa) de la economía, creemos que es posible y necesario instalar debates sobre el financiamiento de la actividad política, que sirvan por un lado para denunciar el doble discurso vigente, y por otro lado, para ampliar la legalidad política de las organizaciones populares.

2. Auge y declive de los gobiernos progresistas de América Latina

Luego de más de una década dominando la escena, los gobiernos que protagonizaron un “cambio de timón” continental en relación con los años 90 están en declive.

Sus señas de identidad fueron las políticas sociales inclusivas, las políticas económicas heterodoxas, contracara de las neoliberales de los gobiernos precedentes, y las políticas exteriores independientes de los dictados del Departamento de Estado de los EUA.

No pretendemos hacer un balance de lo que dejan esos gobiernos. Es difícil sacar conclusiones válidas para todos, porque no hubo un proyecto único: mientras que algunos propusieron un “socialismo del siglo xxi”, otros aspiraban a un “capitalismo serio”. Unos se presentaron como “revolucionarios” y otros como “ejecutores del cambio posible”. Casi todos gestionaron, aliándose con capitalistas “amigos”, una suerte de neo-desarrollismo con mayores oportunidades de bienestar y empleo para los sectores más postergados de sus países. Algunos reivindicaron concepciones ancestrales de los pueblos originarios en relación con los derechos de la Madre Tierra, y otros no tuvieron reparos para agotarla, contaminarla y destruirla.

Todos, sin excepción, fueron denunciados por manejos corruptos de los recursos del estado. Sería lamentable que eso cristalice como el saldo de esos gobiernos para la historia, pero el riesgo está instalado.

A los efectos de este trabajo, nos limitaremos a señalar que los manejos corruptos de los recursos del estado no son un fenómeno de la última década, ni son patrimonio exclusivo de los gobiernos progresistas. Basta con mencionar los gobiernos de Carlos Menem en Argentina y de Collor de Mello en Brasil para refutar, con ejemplos frescos en la memoria colectiva, la idea de la “novedad” o de la “exclusividad ideológica” de este fenómeno. Pero tampoco queremos caer en el otro extremo: que es un problema de todos los tiempos y de todos los gobiernos. Eso sería negar el problema.

3. Limitaciones políticas y pérdida de la confianza popular

Muchos analistas quieren ver en la corrupción de los gobiernos de la región la principal causa de su declive. Esa mirada oculta causas más importantes, y no reconoce que este fenómeno afecta por igual a los gobiernos de todos los signos ideológicos. No lo aborda como un problema de las democracias en el capitalismo, sino como un problema de los gobiernos progresistas y su doble discurso.

Esa visión se ve favorecida cuando vemos acorralados a presidentes como Nicolás Maduro y Dilma Rouseff por masivas protestas contra la corrupción, y cuando un líder histórico de dimensiones continentales como Lula debe enfrentar a la justicia por las sospechas que lo involucran.

La corrupción afectó la confianza de los sectores sociales beneficiados por los gobiernos progresistas y debilitó su popularidad. Pero el descontento y la desmovilización ya se habían instalado en las bases populares antes que estos escándalos salieran a la luz, y por motivos diferentes.

Entre los más importantes están las limitaciones que tuvieron las políticas aplicadas para satisfacer las demandas sociales, una vez agotados los “vientos favorables” de una coyuntura económica internacional que no fue aprovechada para promover cambios en las estructuras económicas de los respectivos países.

Sin esos cambios estructurales, las mejoras en la distribución del ingreso terminaron chocando con las restricciones que históricamente tuvieron las economías, y los gobiernos progresistas, con diferentes grados de convicción, optaron por encarar políticas de ajuste.

La satisfacción de las demandas sociales, generadas por décadas de postergación de derechos básicos, y potenciadas por un discurso oficial que se apoyó en ellas para

conquistar y conservar el poder, fue cayendo en el tiempo, mientras el discurso oficial se alejó progresivamente de la realidad. En el caso particular de la Argentina, se llegó al extremo de dejar de medir la pobreza.

Otro elemento negativo fue la articulación del estado con las organizaciones populares: en lugar de fortalecerlas y de delegarles poder, se les entregó dinero, bienes o servicios, a cambio de la subordinación total. Las organizaciones que no aceptaron ese esquema perverso fueron marginadas de los planes oficiales, hostigadas, y en algunos casos hasta se fomentó su fractura. El efecto fue una profunda división del campo popular, que no solo lo dejó incapaz de defender a los gobiernos de los ataques de la derecha, sino que le imposibilitó construir una alternativa superadora.

4. La ofensiva de la nueva derecha latinoamericana

Presenciamos una ofensiva de la nueva derecha latinoamericana: sus impulsores saben que ningún gobierno progresista de la región puede caer, o desprestigiarse, a causa de las políticas sociales de inclusión, más allá de sus grandes limitaciones. Por eso no atacan las políticas sociales, sino la corrupción. Sin embargo, desenmascarar esta estrategia no debería ser motivo para clausurar el debate sobre la corrupción.

La nueva derecha latinoamericana ataca las políticas sociales utilizando la corrupción como excusa. Pero además, lo hace con la clara intención de ocultar que las políticas sociales son incompatibles con el ajuste que proponen para recomponer la tasa de ganancia y reformular el proceso de acumulación capitalista sobre la base de una fuerte transferencia regresiva de ingresos.

La peor respuesta del “progresismo” fue defender la corrupción con la excusa de las políticas sociales. Se cometió la misma deshonestidad intelectual de la derecha, con el agravante de que la derecha lo hace para perpetuarse en el manejo y el control del poder social, mientras que el progresismo o los movimientos populares lo hacen para que unos pocos inescrupulosos sigan robando en nombre de los valores y las políticas para beneficiar al pueblo.

5. La desertión de los intelectuales

Reconocer que la corrupción no fue la única razón, ni la más importante, para explicar el declive de los gobiernos de la región no implica justificar la pereza intelectual de sus círculos de “pensamiento orgánico”.

Nada más lejano al deber social de un intelectual que proponer la tolerancia con la corrupción de los gobiernos “en la medida en que se garantice la continuidad de las políticas de inclusión social”.

Lugares comunes del tipo “roba pero hace”, “todos hacen lo mismo pero cuando se distribuye el ingreso la corrupción no es preocupante”, o “es una campaña de la derecha y de los medios hegemónicos”, fueron las justificaciones que pusieron de manifiesto la falta de vocación de la supuesta intelectualidad “progre” por abordar una cuestión criticable desde la ética y desde la política.

Lo primero que debe asumir un intelectual es que la ética es política. Los intelectuales debieron discriminar la corrupción en la política como fenómeno social, de las tendencias delictivas individuales o grupales de funcionarios que manejan recursos públicos para su propio provecho.

No es una conducta política, ni tiene causas ni fines políticos, la venta de tierras fiscales de gran potencial turístico a valores irrisorios, su compra por quienes manejaban desde el estado la fijación del valor fiscal de las mismas, y su reventa al poco tiempo a valores muy superiores a los de adquisición. Ni lo es el cambio de millones de unidades de moneda local por su equivalente en divisas días antes de una devaluación, ni la proliferación de funcionarios que multiplicaron varias veces el valor de sus patrimonios estando en la gestión.

Estas no son diferentes a las conductas delictivas en una empresa privada o un club de fútbol. Pero los intelectuales no tuvieron siquiera el coraje de denunciar los casos flagrantes de enriquecimiento individual al amparo del manejo de decisiones de estado o de información restringida.

6. Corrupción y política

La corrupción en las empresas es una característica de la economía cuando se produce con el fin de beneficiar a la empresa, y la corrupción en los clubes es un problema deportivo cuando se comete para beneficiar deportivamente a una institución. Análogamente, la corrupción en la política es un atributo del sistema político cuando se hace para beneficiar a un partido por medios ilegales. Desde el punto de vista moral o legal no hay diferencia, pero desde el punto de vista político no es lo mismo “robar para la corona” que robar para uno, para decirlo en términos vulgares.

La trampa en la que cayó la intelectualidad progresista es no haber ido más allá de reconocer que “no es lo mismo”, y no haber avanzado en la condena de la corrupción

política ni de las conductas individuales, sino haberlas justificado con el silencio o peor aún, con argumentos vergonzantes como la “inevitabilidad”, el “realismo” y otras banalidades por el estilo.

El delito individual es criticable con argumentos éticos y legales, pero también con argumentos políticos y sociales: nadie tiene el derecho de utilizar una función emanada de la voluntad popular para sustraer, en beneficio del interés individual, los recursos que deben aplicarse a la satisfacción de necesidades colectivas y a garantizar derechos por los que el estado debe velar.

El delito colectivo con fines políticos es más complejo y requiere de un mayor compromiso intelectual ya que debe abordarse desde múltiples disciplinas de las ciencias sociales, diferentes del derecho penal.

7. Capitalismo y democracia

Poner en debate la corrupción de los partidos, gobiernos y líderes populares, en lugar de negarla o minimizarla, es indispensable para colocar el problema en el marco de la tensión entre democracia y capitalismo en el mundo de hoy. Sólo así podrá correrse el velo interesado que hay sobre la cuestión, y mostrar que también afecta a las restantes corrientes ideológicas.

En las democracias capitalistas modernas, las fuerzas políticas se vinculan con los ciudadanos principalmente a través de los medios de comunicación. Si bien internet y las redes sociales proporcionan una plataforma de bajo costo y un grado de apertura importante, el acceso a los principales medios de comunicación gráficos y audiovisuales es muy costoso, tanto en tiempos electorales como fuera de ellos. Incluso en internet, si se quiere llegar a un público amplio los costos son elevados.

En las democracias capitalistas modernas, los medios de comunicación son empresas privadas cuyos principales ingresos provienen de la venta de espacios de publicidad, y el segundo de publicidad política es una mercancía y no un bien público.

En las campañas electorales, los tiempos son reducidos y en pocos días debe hacerse un gran esfuerzo de propaganda en todos los medios. La lógica mercantil lleva a que los partidos, incluso los que cuentan con grandes recursos, no pueden demostrar que semejante volumen de gasto pueda financiarse con ingresos procedentes de los aportes públicos y de los afiliados. Por lo tanto las campañas se solventan, en buena medida, por fuera del circuito formal y documentado de gastos regulado por las normas electorales.

Por otra parte, los partidos políticos tienen existencia, actividades y gastos fuera de las campañas electorales, y los bienes, servicios y horas de trabajo que se necesitan para sostenerlos, se tienen que pagar.

A los partidos se les presentan dos problemas: conseguir aportes de dinero además de los que vienen del estado y de los afiliados, y disponer de una “ingeniería de la simulación” para aplicar, con apariencia de legalidad, las sumas que no se pueden declarar como ingresos genuinos. En términos brutales: obtener recursos por medios no permitidos, y blanquearlos para que se puedan usar. Los mismos dilemas de la delincuencia sofisticada.

En lugar de considerar sus necesidades como necesidades sociales, y buscar un acuerdo de la ciudadanía respecto del financiamiento público y transparente de la actividad política, los partidos adquieren compromisos relacionados con las decisiones de gestión que tomarán en el caso de llegar al gobierno. La promesa de devolución del aporte de campaña es condición para obtenerlo, y suele instrumentarse bajo la forma de contratos de obra, de servicios, o de aprovisionamiento.

Para devolver los aportes, los contratos comprometidos deben incorporar un sobreprecio por encima de su costo real. Esto hace que no puedan adjudicarse en condiciones de competencia con oferentes que sólo esperan cubrir los costos más un margen normal de beneficio. Devolver con contratos públicos los aportes privados al financiamiento de la actividad política no solamente implica cargar al presupuesto público una parte del costo de la campaña del partido gobernante en detrimento de todos los demás, sino también anular la competencia y la transparencia en las contrataciones del estado.

Podría completarse esta crónica con temas tales como la contratación de obras que la comunidad no necesita, pero se hacen únicamente para posibilitar la devolución del aporte, o la contratación de servicios que en realidad jamás se prestan, pero se hacen con el único fin de generar el retorno.

Las prácticas que se comentaron se realizan cuando el acceso al gobierno es una expectativa. Cuando el partido ya está en el gobierno, las mismas se utilizan para generar el ingreso y no para devolverlo. Contando con un proveedor “amigo”, éste se limita a canalizar el sobreprecio acordado hacia los operadores del gobierno. Al igual que ocurre con los aportes de campaña, se presenta el problema de “blanquear” el retorno para poder utilizarlo en actividades lícitas.

Amparándose en la tolerancia social y en el control de jueces y fiscales, en la Argentina reciente se han llegado a declarar abiertamente aportes de campaña de empresas farmacéuticas vinculadas al narcotráfico, se ha fraguado el alquiler de

cientos de habitaciones de hoteles pertenecientes a sociedades cuyos accionistas son funcionarios públicos, se ha permitido que los proveedores amigos retengan impuestos y no los ingresen al organismo recaudador para crear medios gráficos y audiovisuales, entre otras burlas a la confianza pública.

Estos delitos pueden hacerse, y a veces se hacen, sin que ningún político se lleve un centavo a su casa, y no requieren de esquemas sofisticados. Sus operadores siempre se excusan en que son sólo un medio para financiar propaganda electoral, oficinas de reuniones, conferencias, actos públicos y toda la logística asociada a una actividad que es legítima, legal y socialmente necesaria. De hecho la observación y comparación de la situación de la corrupción política en Argentina y Brasil permite observar que mientras en nuestro país las maniobras ilegales y oscuras coinciden con dirigentes políticos que logran fortunas millonarias, en Brasil estas cuestiones no necesariamente se asocian con la existencia de dirigentes políticos que en el marco de su gestión se hagan millonarios. De hecho no es la característica ni de Lula ni de Dilma Rouseff. Dicho en sencillo, mientras en Brasil la corrupción política no necesariamente está asociada a dirigentes del PT millonarios, En nuestro país, la corrupción política bien de la mano del enriquecimiento de los funcionarios y de buena parte de los principales dirigentes del PJ.

8. Democracias de baja calidad

Parece claro que la corrupción política no es un fenómeno que pertenezca al campo de la moralidad de las personas, aunque es seguro que se requieren personas de muy baja moral para orquestar estas maniobras.

La corrupción política es un fenómeno propio de la calidad de la democracia: si el sistema impide la competencia electoral a menos que se cometan delitos, no basta con perseguir los delitos, sino que se debe poner en tela de juicio el sistema de partidos políticos y en particular el financiamiento de la actividad. No hay reforma política posible, con visos de seriedad, si no se aborda este tema.

Para fijar la agenda de la reforma política, la ciudadanía debería responder las siguientes preguntas, entre otras posibles, y definir entonces los cambios que quiere impulsar:

¿Qué clase de democracia es aquella que al margen de cualquier discurso electoral o programa político, gestiona las decisiones de gobierno como una mercancía? Y cualquiera sea la respuesta, como ocurre en cualquier mercado, ¿quién se beneficiará en última instancia de las decisiones públicas, si éstas se gestionan en un mercado?
¿No serán acaso los capitales concentrados, como en cualquier otro mercado?

¿Qué clase de democracia es aquella que limita, acertadamente, los aportes privados de empresas a los partidos, pero tolera la corrupción en el manejo de la cosa pública, porque de lo contrario no habría forma de financiar las campañas? ¿No será que la inevitable condena social a los políticos hace de cortina de humo para ocultar los males del capitalismo en esta cuestión?

¿Qué clase de ejemplo dan los líderes y los partidos populares, que en lugar de denunciar el cinismo del sistema, una vez que llegan al gobierno, llevan a la práctica las mismas formas de financiamiento espurio que habían criticado durante décadas a los “partidos burgueses”?

9. Radicalizar la democracia

En otro momento de la historia, las revoluciones democráticas fueron necesarias para superar las trabas del feudalismo y dar lugar al capitalismo. El resultado del capitalismo, en la actualidad, es el debilitamiento de la democracia.

Radicalizar la democracia, entonces, puede pensarse como un camino a recorrer para poner en evidencia las limitaciones que el orden socioeconómico impone a las libertades y a la igualdad política.

Es lo contrario de lo que hicieron los partidos que llegaron al gobierno y sus líderes, que escogieron practicar la ética perversa del capitalismo en materia de financiamiento de los aparatos políticos y de articulación clientelar con los actores sociales.

En Argentina al menos, de ese modo sustituyeron los intereses del pueblo en nombre de los cuales gobernaron, por los intereses del partido al más puro estilo estalinista, para sostenerse el poder a toda costa.

Radicalizar la democracia en materia de legislación partidaria y de financiamiento de la actividad y de las campañas políticas implica, como primer paso, instalar el debate social sobre el concepto de que la propaganda política no debe ser una mercancía, sino un bien público.

Como tal, no puede librarse a la lógica del mercado, debe ser financiada por el estado con los aportes de la comunidad, debe distribuirse de acuerdo con las necesidades, la cantidad que disfruta cada ciudadano no puede ir en detrimento de la que disfruta el resto de la sociedad, y ningún ciudadano puede ser excluido de ella. Cuando esta idea se haga carne en la sociedad, se habrá ganado una importantísima batalla cultural que abrirá la puerta para la radicalización de la lucha contra la corrupción política.

Radicalizar la lucha contra la corrupción política es defender los recursos del pueblo que están incluidos en los presupuestos, tener una ciudadanía atenta a que los funcionarios no hagan un uso particular de lo que es de todos, en lugar de ser tolerante con estas conductas, cuidar el patrimonio común representado por los bienes del estado, y por los bienes que se entregan a la comunidad para que los gestione de modo honesto y transparente, pero no meramente por razones morales, sino para luchar contra la desigualdad y la opresión.